

Quienes nos dirigimos a Uds. somos familiares de personas que fueron arrestadas por los Servicios de Inteligencia Militar chileno y posteriormente llevadas a lugares que desconocemos, de tal modo que nos ha sido imposible poder averiguar noticias acerca de su paradero y situación actual, agregándose la circunstancia que el Gobierno chileno niega el hecho mismo de la detención.

Muchas han sido las gestiones que hemos realizado para obtener una respuesta oficial y responsable sobre la vida y suerte de nuestros familiares. Hemos acudido a autoridades administrativas y judiciales, y efectuado acciones a través de personeros y organismos nacionales e internacionales y todas ellas han sido enteramente infructuosas.

De esta manera conformamos una Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la cual reúne a 270 personas en esta misma situación.

Ahora bien, con posterioridad al pronunciamiento militar del 11 de Septiembre de 1973 y especialmente desde comienzos del año 1974, los Servicios de Inteligencia chilenos, de los cuales el principal es la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), creada por decreto ley, actúan con total autonomía e independencia. Se detiene a las personas sin orden emanada de autoridad competente y sin que los aprehensores se identifiquen. Los detenidos son llevados a lugares desconocidos para nosotros y permanecen durante tiempo variable, pero generalmente prolongado, sin que sepamos nada de ellos. Muchos aparecen posteriormente arrestados en algunos de los campos de prisioneros políticos que mantiene el Gobierno Militar. Sin embargo, una gran cantidad permanecen indefinidamente en esta calidad de desaparecidos. Fuentes enteramente responsables han señalado que el número aproximado de detenidos desaparecidos en el país asciende a 1.500. Este número cada día aumenta por el hecho de que se sigue deteniendo a nuevas personas con iguales procedimientos.

La arbitrariedad que estos métodos implican y la falta de mecanismos efectivos de control crean una situación generalizada de incertidumbre y temor, al cual se agrava con el hecho de que los medios de comunicación social se encuentran totalmente controlados por el Gobierno y no es posible la expresión de ideas contrarias a las oficiales.

Esta situación general se ha visto agravada por acontecimientos recientes. Comenzó cuando personeros del Gobierno empezaron en diversos medios informativos a negar las detenciones y desapariciones, descalificando nuestras denuncias al tacharlas de falsas y montadas por señores políticos externos e internos del país.

Continuaron diciendo que nuestros familiares estaban en la clandestinidad, preparándose a derrocar el Gobierno Militar. Crearon toda una versión acerca de supuestas guerrillas en el sur de Chile y en regiones fronterizas con Argentina, en las cuales estarían actuando los " supuestos detenidos desaparecidos".

No hay que esforzarse mucho para entender cual sería la justificación que se daría al problema que se les planteaba y la respuesta que nos darían.

Efectivamente, poco a poco comenzaron a darse a conocer algunos nombres; LUIS ALBERTO GUENDELMAN WISNIAK y JAIME ROBOOTHAM BRAVO, aparecen muertos por " venganza entre extremistas " el día 12 de Junio en Argentina. Algunos días después, 16 de Julio, a NESTOR ALFONSO GALLARDO AGUERO, se le sindicó como el peligroso extremista "Carlos" intensamente buscado en diversos países.

Días más tarde, el Cónsul de Chile en Buenos Aires, llama al padre de JUAN CARLOS FERRELMAN IDE para comunicarle que su hijo había sido encontrado muerto en ese país.

Pero esto tiene sus puntos más altos cuando el 22 de Julio aparece un comunicado extractado de la revista argentina "LEA", en el que se da a conocer una nómina de 60 personas muertas en diferentes países: Panamá, Venezuela, Argentina, Francia, Colombia y México, también por "rencillas personales y de dinero".

Posteriormente, el 24 de Julio, se da a conocer un boletín de prensa en que, según informaciones del diario "O DIA", de Curitiba, Brasil, en enfrentamientos con fuerzas de policía argentina ocurridos en Salta, Tucumán, Mendoza, Córdoba y Rosario, habían "resultado muertos, heridos o evadidos" 59 personas más, a quienes califican de "extremistas".

Coincidentemente, el total de los nombres dados a conocer, está incluido en las nóminas de nuestra agrupación y poseemos la documentación necesaria para comprobar su existencia; incluso en la mayoría de los casos son declaraciones juradas en las que nos hacemos responsables individualmente de la denuncia y forma de detención de estas personas.

Ante tales hechos, el Gobierno ha mantenido un silencio absoluto, no ha confirmado ni desmentido estas publicaciones, limitándose a adoptar una postura de mero observador.

Nuestra desesperación y angustia llega a límites increíbles, pero entendemos que tenemos que aclarar esta situación y pedir que se nos informe responsablemente de estas vidas. No queremos que estos hechos se sigan suscitando como hasta ahora. Y sabemos que continuarán si no se alzan en el mundo, junto con nosotros, voces que impidan tales atrocidades.

Por todo esto les llamamos a :

- 1.- Solidarizar con la situación de angustia y represión del pueblo chileno, denunciando el carácter del Gobierno Militar.
- 2.- Extender este llamado a todos los sectores democráticos y humanitarios de su país y del mundo, en general.
- 3.- Solicitar a los Gobiernos de Colombia, Panamá, Venezuela, México, Argentina y Francia, para que presionen e investiguen estos hechos.
- 4.- Exigir al Gobierno chileno que responda sobre las versiones arrojadas en la revista "LEA" para que den a conocer sus fuentes de información e inicien una investigación destinada a aclarar la veracidad de los hechos.

Esperamos toda la acogida y solidaridad que tanto necesitamos en estos momentos. Todos y cada uno de nosotros que conozca esta situación seremos responsables si no hacemos algo AHORA para que termine de una vez.

Agradecemos desde ya.

AGRUPACION DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS.

Santiago de Chile, Julio de 1975.